

Chile:

mitos y realidades de una transición

Juan Jacobo Velasco¹

El éxito amarrado

Es extraño para un ecuatoriano estudiar ciencia política y economía en Chile. Extraño, por decir lo menos, porque mientras las cosas se perciben como en franco estado de eclusión en el resto del continente, comenzando por nuestro país, acá, más bien que mal, las instituciones funcionan, existe una estructura relativamente transparente y complementaria entre los sectores privado y público que deriva en una economía sana y responsablemente manejada, la corrupción es mínima, y el Gobierno tiene un respaldo sólo comparable con el de los países del primer mundo. En ese marco se hace ciencia social, y de la buena. ¿Es esta una “Isla de la Fantasía”, forjada a sangre y fuego por diecisiete años de dictadura y un modelo económico exitoso?

En Chile no existe una mala imagen de lo político que no estuviera matizada por la misma crisis de representatividad que experimenta la sociedad mundial al tenor de la globalización. Esto tiene que ver con la forma de hacer política en ese país, en donde los aparatos

Velasco, Juan Jacobo, 2004, “Chile: mitos y realidades de una transición”, en *ÍCONOS* No. 18, Flacso-Ecuador, Quito, pp. 133-140.

partidarios funcionan, en donde los políticos lo son de profesión, en donde existe un compromiso ideológico, que no sólo se origina de la fractura que supuso la dictadura, sino de una historia larga, en donde decenas de años de tradición republicana moldearon las formas y los fondos políticos. En ese contexto, uno de los éxitos de la transición radica en el reaprendizaje casi instantáneo de dicha tradición.

Chile ha sido uno de los países más ideologizados del continente. ¿Cómo gobernar algo que aparentemente es irreconciliable e implausible? La ideologización tiene algo bueno que es el compromiso, que deviene en la previsibilidad. A la hora de cerrar filas, tanto los políticos como los partidos y sus simpatizantes, tienen posturas más bien monolíticas. Esto confiere a sus líderes y a las transacciones que realizan, un espíritu fiable, radicalmente mayor al que se observa en otros países. Y como la tradición señala que finalmente los partidos deben pactar, dichos pactos, una vez alcanzados, tienen espíritu de ley.

Si a estos componentes se suman una tradición legalista culturalmente enraizada y el compromiso tácito de preservar el espacio de desarrollo económico a como dé lugar, uno puede darse cuenta que la gobernabilidad chilena radica en una amalgama de arreglos institucionales en las diferentes esferas sociales y en el deseo de sus líderes de preservarlos. Sin embargo, esta tendencia estructural hacia el acuerdo y la consistencia se debe en buena

1 Master en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y egresado de la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile.

medida a que la institucionalidad política y económica están amarradas a la herencia legal (la Constitución de 1980) y funcional (el modelo económico) que fue impuesta a la sociedad civil tras 17 años de régimen militar.

En el primer caso, el modelo de representación política permite que una minoría, como ha sido el caso de los partidos de derecha, esté sobre-representada en el Parlamento como consecuencia del modelo binominal de elecciones. Este sistema obliga a que los partidos de alén entre sí y participen en conglomerados que pueden postular hasta dos candidatos, saliendo electos aquellos que representen las primeras mayorías de sus respectivas alianzas.

Existe la posibilidad de que en una alianza sus dos candidatos hayan recibido más votos (por ejemplo, hayan obtenido 28% y 27% de los votos, respectivamente) que la primera mayoría del otro conglomerado (que pudo recibir 25% de los votos, mientras que el segundo de la lista recibió 10%), y aún así no salgan elegidos los dos candidatos más votados. La razón: para que puedan entrar sus dos candidatos, la alianza ganadora debe duplicar en votos a la segunda alianza más votada. En el ejemplo mencionado, la alianza ganadora obtiene el 55% de los votos, que es menos del doble de lo que obtiene el conglomerado perdedor, 35%.

Este esquema ha asegurado que la estructura legislativa sea relativamente equilibrada entre los partidos de derecha -Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), conocidos como "Alianza"- y los de centroizquierda -Democracia Cristiana (DC), Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD) y Partido Radical Social Demócrata (PRSD), que responden al nombre conjunto de "Concertación"- impidiendo que se establezcan las mayorías necesarias para modificar los artículos de la Constitución de 1980 que instituyen el sistema, porque los partidos de derecha, que son los beneficiarios, al casi empatar en número de representantes han mantenido su negativa a modificar el esquema electoral.

Si a ello se agrega que dicha Constitución instauró la figura de los senadores designados por un número específico de instituciones, entre las que destacan los representantes de las diferentes ramas de la FFAA., difícilmente se iba a obtener el número de votos necesarios para la aprobación final de las reformas constitucionales en la Cámara Alta.

Pese a su origen espurio, en la práctica, el sistema binominal ha provocado una suerte de "imán" que, por un lado, conduce a las partes a una obligada resolución pactada de los proyectos de ley, y por otro, al orden al interior de las alianzas, por la necesidad de mantener las cuotas electorales de sus componentes para alcanzar las mayorías necesarias para legislar.

Este segundo aspecto se ha convertido en una razón de ser esencial por dos causas. La primera tiene que ver con el *leitmotiv* de cada uno de los conglomerados. Conforme el año de la reinstauración de la democracia (1990) queda más lejos, los partidos de la Alianza dejan de ser vistos como pinochetistas y los de la Concertación, por efectos del ejercicio del poder, pierden su condición de transformadores. De hecho, la tendencia al centro que provoca el sistema binominal en los partidos y las alianzas, hace que estas tiendan a parecerse, y diverjan en los debates fundamentalmente valóricos. Por lo tanto, la razón de ser de los conglomerados, más que ideológica, es operativa.

La segunda responde a la exclusión de la que son víctimas los partidos que no pertenecen al sistema. Con contadas excepciones -que se observan en las elecciones seccionales- ningún partido fuera de los dos grandes conglomerados ha contado con una representación parlamentaria acorde con su votación. El caso más palpable es el del Partido Comunista (PC), que en algunos casos ha rebasado el 7% de los votos totales y, empero, nunca ha obtenido un escaño en alguna de las dos cámaras.

En el caso del modelo económico, este se ha impuesto gracias al poder, influencia y prestigio que han ganado los economistas chilenos. Cada vez que se habla del "milagro

chileno” -ese ideario basado en el “triumfo del mercado”- se piensa en los factores que explican un cambio económico que modificó la esencia misma del país. Se habla de Pinochet, de la necesidad de un gobierno de facto para propiciar la estructuración de un verdadero “libre mercado” y se olvida de que en 1979, 16 países del continente tenían gobiernos militares abocados a ese objetivo, y sólo uno lo alcanzó.

No está en Pinochet, ni en la dictadura, la respuesta. Esta tiene que ver con unos factores propios que se encuentran en la raíz del modelo chileno, que fue creado por una elite intelectual neoliberal a la que se le dio la oportunidad de poner en marcha lo aprendido en la más radical de las escuelas de economía del mundo: la de la universidad de Chicago.

Fueron los ex alumnos de Milton Friedman, a quienes posteriormente se los denominó “Chicago Boys”, los que tomaron la apuesta del gobierno militar, aplicando a rajatabla y con el apoyo total del Estado, la doctrina de su mentor, eliminando las distorsiones de precios, liberalizando la competencia, tanto interna como externa, reduciendo al mínimo los aranceles y los subsidios, y empujando la injerencia estatal.

En esta “prueba de laboratorio” el proceso de aprendizaje fue fructífero en la medida en que se tomaron los correctivos de manera apropiada y rápida. No en vano, la primera ola de liberalización, entre 1976 y 1981, desembocó en una recesión estrepitosa que llevó al PIB chileno a contraerse 14% los tres años siguientes, como consecuencia del resquebrajamiento del sistema financiero y del recién inaugurado (1981) sistema previsional privado. La crisis en la que desembocó el crack financiero (las tasas de desempleo superaron el 20%), condujo a volver más rigurosos los mecanismos de control, lo que surtió efecto gracias a la histórica cultura chilena de respeto de la legalidad, cuya funcionalidad salta a la vista frente al contexto latinoamericano.

Conforme el crecimiento se produjo, los economistas aparecen en la escena de la opi-

nión pública en Chile como profesionales reconocidos y apreciados, cuyas contribuciones se perciben fundamentales para el desarrollo del país. Este sentimiento de estima es muy similar al que experimentaron otros grupos profesionales (como los abogados y los sociólogos) en otros momentos históricos. Sin embargo, este reconocimiento no es generalizado por cuanto el mérito lo reciben los economistas liberales, particularmente aquellos que han estudiado en universidades norteamericanas. De ahí que los economistas de tendencias o líneas de pensamiento distintas (estructuralistas, marxistas o, desde la perspectiva geográfica, “europeos”) no reciban la aprobación que logran los profesionales formados en EE.UU. Todo ello ha derivado en el aumento del número de estudiantes en las principales escuelas de economía norteamericanas, convirtiendo a Chile en el país con el mayor número de economistas con P.h.D. per cápita de América Latina.

Estos antecedentes permitirían confirmar la idea generalizada de que en Chile los economistas han adquirido una importancia mayor respecto de otros profesionales y técnicos. Ello, sin embargo, no sería una causa que por sí misma explique el poder político real ganado por el gremio. Este se manifestaría de una manera más sutil, que tiene que ver con la forma cómo el gobierno toma sus decisiones. A continuación se analizan varios aspectos que contribuirían a explicar las manifestaciones de ese poder:

Los electores chilenos ya no piensan tanto como ciudadanos, sino como consumidores (parecidos a los electores norteamericanos). De hecho, el estilo de vida del chileno es una versión latinoamericana del american way of life, tanto en lo doméstico como en lo económico, por lo que no podía dejar de serlo en lo político.



- a) El presupuesto estable. Chile es un caso único en América Latina porque su sector público ha registrado superávit durante once años consecutivos (1988-1998) y un déficit cercano al cero por ciento en el periodo de contracción económica correspondiente a 1999-2001. Esto se debe a la Ley de Presupuesto vigente, diseñada por economistas, que acota la discusión presupuestaria a un tope señalado por el aumento de la inflación y la productividad del sector público. En la ley se consagra la necesidad de que el Gobierno gaste lo que le ingresa, cambiando los ítems de gasto a través de la eliminación de otros. Es decir, el gobierno, si quiere aumentar el gasto en algún sector específico debe disminuirlo en otro, previa justificación.
- b) La independencia del Banco Central. La Ley que en 1990 cambió los estatutos del Banco Central (BC) establece la independencia del instituto emisor frente al Gobierno, centrando su ámbito de acción en la lucha por mantener la inflación baja. Esto genera una fuente de conflicto con el Gobierno, el que puede estar interesado en que las tasas de interés se mantengan bajas para reactivar la economía. De hecho, gran parte de la caída del PIB de 1999 (-1.1%) se le imputa a la decisión del BC de mantener elevadas las tasas de interés para mantener controlada la inflación, pese a advertirse los efectos recesivos de la denominada crisis asiática. En este caso, también se advierte la preeminencia de los conceptos económicos por sobre la intencionalidad del Gobierno.
- c) La política pública. Desde la manera como se seleccionan los contratistas -quienes entran en un concurso público y licitan en función de los precios y la calidad del servicio que ofrecen-, pasando por la priorización del gasto -que se fundamenta en la evaluación técnica de los proyectos público de toda índole, en base de los costos y retornos de los mismos- y culminando con los mecanismos de fiscalización -donde se evalúan en qué y cuánto se gastó, los retornos de la inversión y los alcances de la misma-, el esquema economicista (Public Choice) de aplicación de política pública traspasa todos los ámbitos del sector público.
- d) Participación directa en el gobierno. Uno de los aspectos en que se destacan los espacios ganados por los economistas tiene que ver con la participación directa de éstos en el Gobierno. En la actualidad, de la totalidad de funcionarios (17) de máxima jerarquía -16 ministros más el Presidente- siete tienen formación económica, lo que constituye el 41% del total de la plana mayor del Gobierno. Este porcentaje cae a 30% cuando se incluyen los 26 subsecretarios. Si bien estos datos no discriminan por el peso relativo de los ministerios del área, ni el grado de estudio, no es menor el que los conocimientos económicos constituyen una buena credencial para formar parte del sector público chileno. Esto se ha manifestado en la presencia de economistas en ministerios no económicos, así como en la formación de los candidatos a la Presidencia en las pasadas elecciones.

Los cambios y “el cambio”

Sin embargo, pese a que la institucionalidad política y económica ha sido funcional, el país está experimentando cambios derivados de varios procesos paralelos que han generado fricciones y que bien podrían modificar el estado actual de las cosas.

La apertura económica provoca un alto nivel de competencia, de la que se aprende a usar las tecnologías tanto para la generación de bienes y servicios como para la organización de los procesos de producción y comercialización. Ello ha sido fundamental para el modelo de desarrollo chileno, que se basa en la inserción plena del país en los procesos de apertura comercial, de capitales y conocimiento que es inmanente a la globalización. No en vano, el acelerado crecimiento econó-

mico registrado entre los años 1986 y 1998 (7.1% promedio anual) se debió en buena medida al esfuerzo estatal y privado por expandir los mercados y los productos y servicios exportables, y otro tanto a la llegada de capitales extranjeros -hasta 1998, las restricciones obligaban a que el capital de inversión sea más productivo que especulativo- que incrementaron las opciones de inversión y provocaron un crecimiento de la demanda interna superior al 9% entre los años 1990 y 1998.

Ese mismo nivel de apertura le pasó la cuenta a Chile luego de la crisis de 1998. Tras las recesiones de los países del sudeste asiático y el colapso de la economía rusa, el clima de incertidumbre se tradujo en una baja importante de la demanda mundial de *commodities*, en particular del cobre. Pese a los esfuerzos por disminuir la dependencia de la economía chilena a este metal, a través de la diversificación de las exportaciones, el cobre sigue siendo la principal fuente de ingresos, representando el 35% del total de las ventas al exterior.

La reducción en un 40% del precio del metal (en menos de un año su cotización de la libra de cobre pasó de un dólar a sesenta centavos) significó una gran pérdida de términos de intercambio que provocó un ciclo contractivo que desde 1998 hasta 2002 se tradujo en un descenso del crecimiento a niveles inferiores al tres por ciento promedio anual, en un incremento del déficit de cuenta corriente (5% del PIB) a fines de 1998 -que se revirtió al año siguiente como consecuencia del ajuste del gasto-, en un aumento de la tasa de desempleo del seis al nueve por ciento, en un aumento de las tasas de interés en 1998 a máximos históricos para los últimos quince años, en una contracción del consumo (variable que hasta 1998 crecía al 11% anual y que en 1999 cayó 4%) producto de las tasas de interés altas y los menores ingresos del cobre, y en la ruptura del ciclo consumo-crédito-ingreso-consumo, que afectó tanto a las empresas como a las personas.

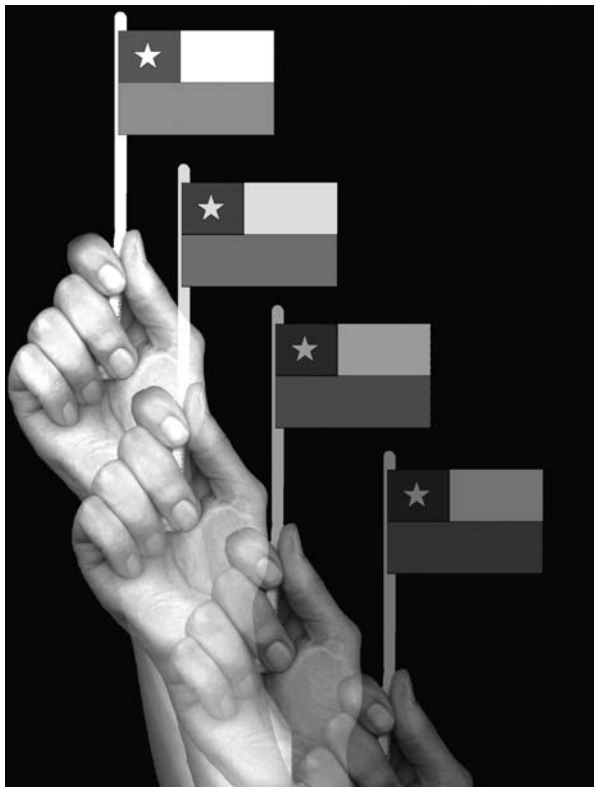
Según Eugenio Tironi, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y autor del libro *El cambio está aquí*, Chile es

un “país adicto al crecimiento” y esto quedó en evidencia tras la crisis económica de los últimos años. Tironi cree que el ritmo de crecimiento acelerado del país modificó los comportamientos de todos los individuos, adscritos o no al modelo económico heredado del régimen militar, en la medida en que los beneficios derivados de este crecimiento (mayores ingresos, más fuentes de trabajo, acceso indiscriminado al crédito y al consumo) les permitió a todos los chilenos, y en particular a las clases sociales emergentes, ascender en la escala social y percibir que su vida mejoraba.

El rol del Estado como prestador de los servicios de seguridad social quedó relegado porque cada individuo decidió asumir su propia protección social, gracias a que el desempeño económico se lo permitía. “Todo lo concerniente a la salud y educación fue asumido por los individuos, porque pese al costo de estos servicios (que en Chile tienen una organización de índole privado) ellos podían financiarlo, dejándole al Estado las tareas de seguridad pública y supervisión del modelo económico. Pero cuando el país deja de crecer al siete por ciento y crece al tres por ciento, desaparece la capacidad individual de dar respuesta a la seguridad social y de seguir recibiendo los beneficios del modelo”, señala Tironi.

El problema es que la reducción del nivel de crecimiento desmantela una estructura frágil y acrecienta algo que los chilenos no toleran: la incertidumbre. Acostumbrados a crecer velozmente, a esperar que la dinámica de la economía genere las respuestas pertinentes, los individuos se vieron atrapados en un país totalmente distinto del que habían vivido. Tironi cree que bajo esa estructura, la recuperación del ritmo de crecimiento se vuelve más urgente y en ese sentido señala que “el país es adicto al crecimiento y, aunque no lo quisiera, debe volver a crecer a tasas altas para sostener la endeble estructura social, a menos que el Estado retome sus funciones primigenias”.

Otro factor de cambio que ha experimentado la sociedad chilena es el de las relaciones de poder político en democracia. Durante la década de los noventa, las elecciones en Chi-



Conzalo Vargas

le pasaron a convertirse, literalmente, en una formalidad por efectos de la anticipación de un resultado por todos percibido: que la alianza de Gobierno que ha regido al país desde la vuelta a la democracia, Concertación, iba a ganar siempre, como consecuencia de un mantenimiento del nivel de rechazo a los partidos de derecha, que se presentaban como estandartes del legado pinochetista.

Esta lógica funcionaba en virtud de la estructura electoral anterior al golpe de Estado del 11 de setiembre de 1973, que se caracterizaba por una casi perfecta división de los electores en tres tercios: uno con la izquierda, otro con la derecha y el último con la opción de centro, la Democracia Cristiana. En la primera elección post Pinochet, que significó el triunfo del democristiano Patricio Aylwin, líder de la Concertación, esta estructura se replicó, en la medida en que los dos tercios concertacionistas representaban la consecuente alianza entre la izquierda y el centro. Pero desde entonces ha ido reduciéndose la brecha entre la Concertación y la derecha, al punto que para las elecciones presidenciales de 1999, el líder opositor, Joaquín Lavín, em-

pató con el ahora Presidente Ricardo Lagos, obligando a una segunda vuelta que, a su vez, se convirtió en la primera elección chilena del siglo 21.

Varios procesos concomitantes provocaron que en una década se modificaran las preferencias de los electores: el natural desgaste del ejercicio del poder por parte de la Concertación, que conforme pasa el tiempo tiene menos culpas que echar y más responsabilidades que asumir; una tendencia al centro de los partidos de derecha, asumiendo temas tabúes como los de las reformas a una constitución heredada de la dictadura y las compensaciones a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar; la paulatina desaparición de Pinochet de la escena política; y la crisis económica que afectó a Chile desde 1998 en adelante.

La nueva postura de la derecha frente al tema de los derechos humanos dice mucho de los cambios de la matriz política. El último intento por conseguir justicia y dar con el paradero de los restos de los 3.196 detenidos desaparecidos durante el régimen militar, fracasó tras las sospechas de la acción de las mesas de diálogo que juntó a representantes de las fuerzas armadas y de las asociaciones de los deudos. El descubrimiento de que las pistas proporcionadas por los militares eran falsas y que hubo encubrimientos a ex miembros castrenses y a familiares de militares activos, terminó por sepultar las esperanzas de alcanzar una salida negociada que satisfaga a los familiares de las víctimas. Estos a su vez han tenido desencuentros entre sí y algunos sufren un cansancio comprensible tras la inoperancia de un sistema político que no ha dado solución al problema, pese a que tras trece años, el Gobierno de centroizquierda fungió como abanderado de la causa de los derechos humanos.

Estos hechos condujeron a que algunos grupos de familiares de detenidos desaparecidos pidieran apoyo al partido de la derecha más conservadora, la UDI, poniendo en evidencia una suerte de ruptura que irónicamente dejó en manos de la derecha la batuta sobre una solución final a los crímenes de la

dictadura. Si bien la fórmula de reparación propuesta por la UDI se percibió espuria -pese a lo cual fue recogida en el proyecto presentado por el Presidente Lagos- el que el partido que siempre se ha opuesto al tema de los derechos humanos, reabra el debate y plantee una solución, consolida la estrategia que supone allanar el camino para que el candidato derechista Joaquín Lavín ingrese al palacio de la Moneda como presidente, en 2006.

A ello se une un proceso esencial: la redefinición del elector chileno. Tal como lo explica Tironi, los electores chilenos ya no piensan tanto como ciudadanos, sino como consumidores, y en ese sentido son más parecidos a los electores norteamericanos. De hecho, el estilo de vida del chileno es una versión latinoamericana del *american way of life*, tanto en lo doméstico como en lo económico, por lo que no podía dejar de serlo en lo político.

La confluencia de un sistema binominal en lo político y liberal en lo económico y en el ámbito de las decisiones individuales, ha hecho que en Chile los conglomerados funcionen como un bipartidismo implícito, tal como el sistema norteamericano, y como en este, sus disputas no se centren tanto en el sistema de libre mercado o en la necesidad de crecer y apuntalar al eje de desarrollo del país (la economía), sino más bien en la intensidad y los sesgos de las políticas de Estado, más hacia lo social, en el caso de la Concertación (tal como los demócratas), más hacia lo privado, en el caso de la Alianza (tal como los republicanos).

Esta lectura del sistema de representación fue muy distinta de la que tradicionalmente se había hecho en el país. Con una visión más europeizada, los analistas y diseñadores de las campañas políticas trataban al elector como un ciudadano interesado en la participación política y en la necesidad de los cambios del sistema constitucional, más que en un consumidor de una oferta electoral acorde a sus necesidades. Sin embargo, esa fue la aproximación que tuvo la derecha en las últimas elecciones presidenciales. Joaquín Lavín y sus asesores diseñaron una campaña en la que, a tra-

vés de sofisticados sistemas de mercadeo, evaluaron los gustos y preferencias de los electores, los segmentaron en todos los grupos posibles, de manera tal que el discurso electoral y sus intensidades respondieran a los cambios positivos o negativos de las preferencias de los votantes.

Esa visión, unida a un eje de campaña centrado en “el cambio” que Lavín representaba frente al continuismo de la Concertación, estuvo a punto de ser efectivo en las dos elecciones presidenciales de 1999 y 2000, y probablemente lo sea en las próximas de 2005, en tanto el discurso de “el cambio” siga siendo funcional y atrayente para un electorado cada vez más exigente frente a las ofertas políticas.

La transición interminable

Pese a que cuando se habla de la transición chilena, la estabilidad política y económica alcanzadas parecieran darle una imagen de tarea cumplida, lo cierto es que este sigue siendo un tema de debate y discusión permanente cuando se regresa la mirada a los crímenes contra los derechos humanos ocurridos durante 17 años de dictadura militar. Incluso, la lectura es un poco más sutil porque, tal como se discutió, esta estabilidad está amarrada a una institucionalidad elaborada y forzosamente heredada a la sociedad civil por el gobierno castrense, sin que desde entonces culminen con éxito los intentos por replantear dicho marco institucional en una manera más acorde con las necesidades de una sociedad democrática.

En este sentido, el de la transición es un tema de nunca acabar en Chile. Por un lado, existe una tendencia hacia la construcción del futuro del país a través de una reconciliación implícita, algo que pareciera ser potestad de quienes sufrieron persecuciones políticas durante el régimen militar y hoy son gobierno. El ejemplo más palpable es el de la ministra de Defensa, Michele Bachelet, hija de un ex general opuesto al golpe, quien murió vícti-

ma de las torturas perpetradas por sus compañeros de armas.

La Ministra simboliza el espíritu de una reconstrucción de la identidad del país, en un proceso en el que curar las heridas y perdonar, tender puentes y dialogar, se vuelve ineludible, tanto por parte de los perseguidos, como de los perseguidores. En el caso de estos últimos, resulta notable la participación activa del actual Comandante del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien encabezó un *mea culpa* institucional que ha permitido generar puentes más sólidos entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, y el cierre del proceso de modernización de estas últimas.

La otra cara son las dos partes que no desean una resolución pactada, aunque en este aspecto hay que hacer distinciones entre los bandos: el que todavía no ha recibido una respuesta por el paradero de los 3.196 detenidos desaparecidos, y el de aquellos que no quieren asumir, e incluso pretenden regodearse de lo hecho -lo que incluye los crímenes contra los derechos humanos- por el régimen de Augusto Pinochet.

El problema es grave en la medida en que quienes tomaron la primera opción saben que a los familiares de las víctimas de los crímenes de Estado les asiste la justicia, pero que esta tiene un tope en tanto no existe una voluntad real de todos los implicados en estos atropellos, de colaborar con las cortes.

Esto parte por Pinochet. Su no reconocimiento de los crímenes es el problema mayor porque permite sostener el argumento de sus subalternos de, en sus palabras, “no doblegarse ante la venganza de los comunistas perdedores”. Eso se traduce en una actitud de secreto y negación que impide tanto el avance como la solución de los procesos instaurados para investigar los crímenes. Y aunque todavía algunos en el Gobierno y en la oposición esperan un último gesto del ícono del rompimiento democrático, tendiente a apuntalar la reconciliación, esta ilusión se disuelve conforme el silencio del ex dictador se endurece.

Pese a estas dificultades, se han dado pasos adelante. Esto es particularmente visible en la

continuación de los procesos contra los represores castrenses bajo la figura de secuestro, que es la que amparó la continuación de los juicios, pues esta figura legal no prescribe mientras no existan indicios concretos del paradero de las víctimas y, por lo tanto, no entran en contraposición con la ley de punto final que les traspasó inmunidad a los jefes de la dictadura. El punto crucial es que mientras no se dé la decisión expresa de las instituciones involucradas -en este caso, las FF.AA. y los miembros del gobierno militar- de romper totalmente el cerco hermético que impide hallar los cuerpos de los detenidos desaparecidos, puede que los procesos continúen, pero no se resuelvan.

Sin embargo, el país en su conjunto está abocado a encontrar una suerte de solución para los familiares de las víctimas de la represión, y en este sentido, el Presidente Lagos presentó una propuesta que incluye compensaciones monetarias y reparaciones morales, que ha recibido el apoyo de todo el espectro político. Y aunque esta propuesta no soluciona los problemas de fondo, al menos formaliza la esperanza de dar consuelo a quienes, por treinta años, no lo han podido hallar.

Bibliografía

- Garretón, Manuel Antonio, *et al*, 1999, *América Latina: un espacio cultural en el mundo globalizado*, Convenio Andrés Bello, Colombia.
- Garretón, Manuel Antonio, 2000, *La sociedad en que vivi(re)mos. Introducción sociológica al cambio de siglo*, LOM, Chile.
- Tironi, Eugenio, 1999, *La irrupción de las masas y el malestar de las elites*, Andrés Bello, Chile.
- Tironi, Eugenio, 2002, *El cambio está aquí. La Tercera-Mondadori*, Chile.
- Velasco, Juan Jacobo, 2001, “El poder de los economistas en Chile”, Paper para la maestría de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, Chile.
- Velasco, Juan Jacobo, setiembre de 2003, “Chile, un país diferente”, Serie de artículos para diario Hoy, Ecuador.